

## Nuevos caminos de la Revolución Latinoamericana\*

---

DARCY RIBEIRO, antropólogo brasileiro, fue el primer Rector de la Universidad de Brasilia y durante el gobierno de Goulart ocupó los cargos de Ministro de Educación y de Jefe de la Casa Civil de la Presidencia. Ha trabajado en Uruguay y Venezuela y actualmente está en Chile, como profesor investigador en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Entre sus libros se cuentan *Fronteras Indígenas de la Civilización*, *La Universidad Latinoamericana* y las obras *El Proceso Civilizatorio*, *Las Américas y la Civilización* (3 volúmenes), *El Dilema de América Latina* y *El Brasil Emergente* (en preparación), todas ellas elaboradas con intención de conjunto.

---

Nuevos vientos soplan sobre el escenario político de América Latina en estos años iniciales de la década del 70. Los años 60 comenzaron con la revolución cubana, pero la ola revolucionaria se estancó allí y lo que prevaleció fue el derrocamiento de gobiernos reformistas y la derrota, tanto de la lucha guerrillera como de la orientación frentista de la izquierda ortodoxa.

La nueva década surge con innovaciones que empiezan a cambiar el cuadro, aunque sigan predominando los gobiernos conniventes con el viejo orden oligárquico y con el imperialismo. Tales son, en su forma más brutal, las dictaduras regresivas como la brasileña y la argentina y las restauraciones patriciales como las de Venezuela y Colombia. Además, las revoluciones interrumpidas como la mexicana o en intensa reversión contrarrevolucionaria, como la boliviana.

Los vientos nuevos soplan desde Chile y Perú, que lograron plasmar regímenes distintos de todos los anteriores. Con ello, vuelven a encender esperanzas en los pueblos de Latinoamérica pero, al mismo tiempo, levantan dudas en las vanguardias radicales. Y es natural que así sea, porque los nuevos caminos de ruptura con el subdesarrollo son no sólo atípicos sino también inesperados, lo que suscita indagaciones sobre su naturaleza —si son vías revolucio-

\*Reproducimos en este artículo, dos capítulos agregados a la nueva edición de *Las Américas y la Civilización*.

narias o meramente reformistas— en discusiones que nada tienen de académicas. En efecto, de ellas depende la toma de posición por aquellos sectores de la izquierda que más radicalmente se han empeñado en la lucha contra el sistema vigente y están, por ende, más perplejas frente a la nueva realidad que la historia les presenta. Primeramente, porque los nuevos modelos son protagonizados por actores de los cuales siempre dudaron (como en el caso de Chile), o a los cuales siempre contestaron (en el caso del Perú). Pero también porque se realizan a través de nuevos estilos de acción que, para ellos, representan lo opuesto de lo que se habituaron a esperar como la fórmula de la revolución. Y además, porque los frustra como negación de la leyenda heroica que muchos se dispusieron a encarnar dramáticamente, y los desilusiona como un llamado hecho en nombre de la revolución, para el ejercicio de papeles mucho más prosaicos. Pero, sobre todo, porque levantan dudas, por otra parte legítimas, sobre la efectividad de estas vías para conducir, no sólo a cambios sociales profundos, sino a la liberación de las energías populares, para los efectos de autotransformación que supone una revolución socialista.

#### EL MODELO PERUANO

No fueron, conforme se esperaba, los militantes socialistas y apristas quienes protagonizaron la revolución peruana por la cual lucharon por múltiples caminos, sino sus alternos, los militares. Estos, después de décadas de ejercicio del papel de custodios del viejo orden oligárquico y de represores, tanto de los políticos apristas como de las izquierdas insurgentes, cambiaron brusca y radicalmente su posición. En cierta forma, asumieron el rol renovador del antiguo aprismo precisamente cuando éste, esclerosado, se volcaba hacia la derecha en la esperanza de que así le permitiesen tener acceso al poder.

Este cambio inesperado de papeles, que ha provocado la perplejidad de los apristas y el desconcierto en las izquierdas tuvo un efecto de sorpresa también en la opinión popular peruana. Esta, sin embargo, prontamente aportó respaldo a un poder que rescataba riquezas nacionales de manos de extranjeros, que reivindicaba la dignificación de una imagen nacional degradada desde siempre, merced de la restauración de mártires indígenas como Tupac Amaru, y que enfrentaba la oligarquía con una reforma agraria radical. Los grupos políticos, por el contrario, continuaron hostigando al nuevo régimen. Pero, desprovistos de un proyecto propio alternativo y sin la más mínima capacidad de llevar a la práctica una

acción eficaz contra el nuevo régimen, se convirtieron en una oposición más verbal que actuante.

Apristas e izquierdistas, en su desengaño, niegan que se pueda hablar de una revolución peruana. Curiosamente, no dudan de que hubo una revolución mexicana y una boliviana. Es de preguntar: ¿qué es entonces una revolución social? Creemos que hay acuerdo en que una revolución política se produce cuando la antigua élite dirigente es proscrita del poder y trastrocada por un nuevo liderazgo. Y que una revolución política se transforma en una revolución social siempre y cuando este liderazgo emprenda una reordenación radical del sistema económico bajo la inspiración de valores e intereses correspondientes a la mayoría de la población y, por lo tanto, opuestos a los del viejo orden.

En ese sentido, Perú vive una revolución político-social porque allí las élites tradicionalmente dominantes fueron desplazadas del poder. Y aún más, el nuevo gobierno está tratando de rehacer las bases de la antigua ordenación socio-económica fundada en el latifundio, en la sumisión a las empresas extranjeras, en la procedencia de la gestión privada sobre la pública y en la alternancia de los gobiernos militares con los parlamentarios, ambos conniventes con los factores causales del atraso.

Es evidente que no se trata de una revolución socialista; lo que, por otra parte, no está en discusión. Lo que sí está en debate es el carácter del régimen peruano y sus potencialidades. Los que le niegan carácter revolucionario alegan que en el poder se encuentra un gobierno militar compuesto por generales que han participado, desde siempre, en la estructura tradicional de poder; cuyas metas de renovación estructural se limitarían a una modernización refleja del sistema socio-económico, destinada más bien a perpetuar sus bases capitalistas que a minarlas y cuya postura autoritario-paternalista sería irreconciliable con cualquier forma de participación popular efectiva en el poder. En consecuencia, el experimento peruano terminaría por reducirse a un *bonapartismo* bien intencionado, pero incapaz de llevar a cabo una auténtica revolución social.

La verdad es que los actores de la revolución peruana no son los esperados ni los deseados por la izquierda y por los grupos reformistas. Al contrario, son personeros vistos, a lo largo de décadas, como los adversarios de las fuerzas progresistas que lucharon por las transformaciones que los militares ahora llevan a cabo a espaldas de ellas. Semejante postura es comprensible en una oposición intelectual que ve a los militares como la encarnación misma de la represión política.

Es natural, por eso, que cuando ellos asuman una postura revolucionaria pero manteniendo su viejo lenguaje, su idiosincrasia antizquierdista, o apenas cambiando su estilo autoritario peculiar por modales paternalistas, se tenga dificultad en reconocerles ese papel. Además, la mala voluntad siempre permite aducir que sus motivaciones son cuestionables y hasta subalternas, puesto que no van a la revolución por amor a tesis ideológicas o a doctrinas prescritas, sino por razones de otra índole. Entre ellas, el reconocimiento del fracaso de los políticos profesionales en llevar a cabo transformaciones sociales indispensables; la sospecha de que las izquierdas serían, a su vez, también incapaces de ofrecer una alternativa válida y viable; el temor de que las tensiones sociales que dinamizan sus países, al ser activadas por las izquierdas, terminarían por conducirlos a una convulsión social generalizada que las fuerzas armadas no podrían controlar, y finalmente, el anhelo de liberar a su pueblo de las constricciones deformadoras impuestas por minorías privilegiadas a quienes ya no quieren respaldar.

Pese a estas cavilaciones, cabe poca duda de que, en 1968, asumió el poder en el Perú una antiélite de nuevo tipo, por su orientación antimperialista y nacionalista; por su disposición a promover profundas reformas estructurales; por la osadía y creatividad con que busca soluciones propias y radicales para viejos problemas socioeconómicos con que se enfrenta la nación; por su predisposición a explotar, hasta sus límites, la autonomía política relativa de los estamentos burocráticos; por su capacidad de echar a andar la máquina estancada del Estado y modernizar los estilos de la administración pública; y finalmente, por la propensión —inusitada en militares— de respetar las libertades individuales y de evitar la represión contra los disidentes.

Comprueban esta apreciación cinco órdenes de medidas económicas tomadas por la revolución peruana. *Primero*, la amplitud y profundidad de la reforma agraria en curso y la adopción del cooperativismo como forma preferencial de gestión de las grandes empresas rurales. *Segundo*, la legislación sobre comunidades industriales, que programa la participación de los trabajadores en el capital y en los beneficios de las empresas industriales privadas, impone formas de organización empresarial tendientes a la cogestión y, al mismo tiempo, ata al empresario a las empresas, evitando la pérdida de su capacidad gerencial. *Tercero*, la política externa, tendiente a encontrar formas más favorables de intercambio internacional, a fortalecer el Pacto Andino y a romper con la dependencia. Para ello proponen medidas destinadas, por un lado, a impedir el aislamiento del Perú del comercio mundial y evitar el estancamiento

de la explotación de las riquezas naturales que constituyen la principal fuente de recursos para el desarrollo; y por otro lado, a utilizar la explotación de la minería y del petróleo en favor de los intereses nacionales. *Cuarto*, el control público del comercio exterior de minerales, harina y aceite de pescado, además de la nacionalización, todavía incipiente, del sistema bancario. Cumple señalar que estas últimas medidas no son ya conquistas logradas y consolidadas, sino metas por alcanzar. *Quinto*, el fortalecimiento del papel del Estado en la vida económica, como el centro efectivo de decisiones sobre ahorro e inversión; sobre prioridades de desarrollo y como gestor de las empresas básicas.

Tan importantes quizás como estas cinco órdenes de medidas económicas, son las medidas propiamente políticas —ya reglamentadas pero sólo parcialmente ejecutadas— en el sentido de ganar la opinión pública y movilizar al pueblo para apoyar el programa de cambios. Tales son, primero, la limitación del monopolio de los medios de comunicación de masa por parte de los estratos dominantes, a fin de garantizar una información no distorsionada por los intereses privatistas de los mismos. Segundo, la anulación del poderío económico y político de la oligarquía agraria y la anulación del antiguo sistema político-partidista como fuerza de oposición. Finalmente, la deliberación de no crear un partido de la revolución —al estilo mexicano o del egipcio— como aparato oficial de organización, expresión y control de las masas.

Esta última es, quizás, la deliberación más remarcable dentro de todas las mencionadas, porque nadie duda de la extraordinaria eficacia política de un instrumento de este orden; de la facilidad con que un régimen como el peruano lo crearía y haría crecer prodigiosamente, ni de las gratificaciones que él podría aportar, de inmediato, como forma de manifestación de un apoyo popular tácito que todavía no ha encontrado lenguaje. En estas circunstancias, es tanto más significativa la decisión de no crear ese aparato, cualquiera sea la razón que la inspire. Entre otras razones se especula con la suposición de que, la creación de semejante partido conllevaría el surgimiento de una burocracia de clientela que se apropiaría de la leyenda revolucionaria en provecho propio; de que el partido único generaría liderazgos oficiales, que disputando a la oposición izquierdista el control de las masas, tenderían a tomar posiciones reaccionarias; o, finalmente, de que conduciría a la aparición de un liderazgo civil competitivo con el militar.

Empero, el gobierno peruano no puede seguir operando en el vacío político. En el plano social necesita que, a la integración económica de las amplias masas campesinas y marginadas operada

por las reformas estructurales (sobre todo la reforma agraria), correspondan su incorporación a instituciones políticas. Sólo así ellas podrán ejercer un papel más activo y creador que el de simples usufructuarios de beneficios prodigados por el poder. En el plano político, necesita de un apoyo popular explícito para imposibilitar el resurgimiento de la vieja estructura de poder regida por los políticos profesionales; para competir por el liderazgo popular con los cuadros políticos y sindicales apristas y con las vanguardias de izquierda; y sobre todo, para disuadir a los grupos militares reaccionarios proclives a coartar la revolución.

En consecuencia, la decisión de no crear el partido oficial debió hacerse simultáneamente con la de buscar nuevas formas de institucionalización del poder a través de la organización oficial de un sistema de apoyo a la movilización social (SINAMOS). Esta deliberación encierra riesgos y extraordinarias dificultades. Los riesgos son evidentes, porque un aparato burocrático capaz de controlar y manipular las masas, una vez consolidado, puede ser utilizado más bien para permitir el pacto con nuevos herederos de los privilegios antes disfrutados por las clases dominantes tradicionales, antes que servir como fuerza impulsora de la revolución social. Las dificultades residen en la complejidad de la tarea de crear formas originales no-partidistas de movilización social que atiendan, a un tiempo, la carencia de respaldo activo de las masas a la revolución y a la necesidad de organizar las fuerzas populares para que asuman un día el papel de actores e impulsores de la revolución peruana, la cual, inducida desde arriba, adquiere inevitablemente un cariz paternalista. Todos esos reclamos postulan la necesidad de plasmar una nueva institucionalidad sociopolítica.

En efecto, abandonando la institucionalidad anterior, visiblemente insatisfactoria y arcaica, el Perú se encuentra en el limbo de todos los movimientos revolucionarios que buscan una legitimidad consensual que los antiguos regímenes exhibían, pese su carácter retrógrado y que los nuevos no han logrado presentar todavía. No teniendo cabida las formas liberales de la representación electoral, que en el Perú jamás dieron lugar a un modo de vida democrático puesto al servicio de los intereses de la mayoría de la población; no teniendo cabida tampoco los sustitutos nominales de la legitimidad, como la "dictadura del proletariado", que corresponden a coyunturas distintas, se replantea aquí, en toda su amplitud, el problema de la legitimación del mando. Así es que vuelven a la escena tanto los conceptos rousseaunianos de *voluntad general* y *bien común*, como las doctrinas corporativistas, degradadas y desmoralizadas por el fascismo. El desafío peruano es nada

menos que encontrar formas institucionales para captar, expresar e instrumentar la soberanía popular y, en su nombre, emprender la reordenación de la sociedad; legitimar el ejercicio del poder y regular la sucesión; y, por sobre todo, encauzar una participación masiva en el proceso revolucionario por parte de las capas más pobres de la población. Como nadie tiene lecciones que ofrecer en esta materia, es enteramente legítima la búsqueda, por parte de los peruanos, de una nueva institucionalidad.

Las medidas tomadas por el nuevo gobierno van haciendo del Perú un país distinto de lo que era hasta 1968 y los cambios resultantes de la reordenación económica en curso ya están gestando una sociedad y una cultura renovadas. A ello cabe agregar que nadie duda en el Perú de que tanto los antiguos regímenes parlamentarios como las dictaduras militares eran incapaces de promover las transformaciones estructurales protagonizadas por el nuevo régimen. Y muchos sospechan que las izquierdas peruanas, debido a su debilidad, desorientación y división, eran a su vez incapaces de ofrecer una alternativa viable. Aunque al mismo tiempo parecen concordar en que las luchas insurreccionales operadas en el campo en los últimos años, al activar viejas tensiones estructurales, forzaron a los militares a asumir un nuevo papel histórico, desencadenando una revolución social. Sin duda, una revolución insólita, porque fue protagonizada por aquellos de quienes se esperaba únicamente el rol de represores; porque desconcierta a los que se suponían llamados a fraguar la revolución peruana; y finalmente, porque a pesar de haber comenzado, aún busca su propia definición. Una definición explícita y genuina que permita a sus conductores trascender del papel de estamento burocrático al de actores revolucionarios; y que posibilite a los que beneficia o convence, adherir a ella con la convicción de quien se incorpora a un movimiento revolucionario auténtico, generoso y fecundo.

Los propios militares conciben su gobierno como un régimen singular, no clasificable como "capitalista ni como comunista". Esta definición negativa indica, aparentemente, que ellos se han convencido de que el capitalismo dependiente —tal como se cristalizó en América Latina, donde gozó de la más completa hegemonía a lo largo de un siglo y medio, para dictaminar la constitución y las leyes— nada tiene que ofrecer a los pueblos de este continente. Expresa, por otro lado, el rechazo de los militares al socialismo, tal como se presenta históricamente cristalizado en la URSS, Cuba o China. Y quizás también la percepción de que, siendo cada uno de aquellos socialismos el resultado de secuencias históricas singulares y estando todos ellos impregnados por las peculiaridades

de los respectivos contextos socioculturales, su trasplante, antes que indeseable, es imposible. La conceptualización del régimen peruano en términos negativos tiene como consecuencia positiva la de compeler a sus líderes a avanzar hacia la frontera de la utopía en búsqueda de soluciones que convengan a las grandes masas de la población peruana. Soluciones de tipo tal que no sean identificables “ni como capitalistas, ni como comunistas”. ¿Pero, qué será eso, concretamente, sino la alternativa socialista (porque no capitalista) históricamente practicable en el Perú? ¿O, al contrario, alguna forma de neocapitalismo (porque no comunista) que, mediante la modernización reimplante, fortalecido, al privatismo? El aspecto más grave de esta ambigüedad del régimen peruano es que, al conllevar virtualidades opuestas —sin realizar cualquiera de ellas— puede llegar a compartir los defectos del capitalismo y del socialismo sin alcanzar las calidades de ninguno de ellos.

A nuestro modo de ver, el régimen peruano corresponde al paradigma nacionalista-modernizador de la tipología que desarrollamos en otro estudio<sup>1</sup>, aunque reconozcamos que, dada su originalidad, la ubicación en esa categoría o en cualquiera otra sea algo forzada. En nuestra tipología, aquella categoría indica regímenes oriundos de insurrecciones populares, como la boliviana; guerras de emancipación, como la argelina; golpes militares, como el de Nasser; reactivaciones revolucionarias, como la de Cárdenas. En todos los casos, se trata de una antiélite que, asomando al poder en sociedades atrasadas, con poblaciones mayoritariamente marginadas, estructura regímenes atípicos que no son clasificables como capitalistas ni como socialistas. Esto lo hacen a través de movimientos que deben ser conceptuados como revoluciones sociales, porque proscribieron la vieja estructura de poder y porque se capacitaron para llevar a cabo cambios estructurales que exceden los horizontes de los regímenes “desarrollistas”, habilitados únicamente para promover modernizaciones reflejas de las cuales resulta una revigoriación de las viejas estructuras de poder. Se trata también de regímenes nacionalistas, por su propensión a romper las formas más crudas de la dependencia externa, lo que les confiere un cariz antimperialista. Finalmente, son movimientos de modernización (aunque no refleja) que emprenden una renovación de los estilos arcaicos de propiedad, de administración y de gestión, que fortalecen el papel del Estado y que favorecen la tecnificación de las actividades productivas y de los servicios. Sin embargo, su capacidad de innovación, siendo insuficiente, se encuadra en la categoría de los impulsos de actualización o incorporación histórica conducentes

<sup>1</sup>Ver Darcy Ribeiro: *El Dilema de América Latina*, México, 1971, Siglo XXI.

a formas neocoloniales de dependencia, más que en la de movimientos de aceleración evolutiva que abren a una sociedad perspectivas de autotransfiguración para integrarse autónomamente en la civilización de su tiempo.

Los regímenes estructurados como nacionalistas-modernizadores contrastan con los socialistas porque no erradican la propiedad privada de los medios de producción en los sectores básicos de la economía; porque confían en el poder renovador y progresista del empresariado privado, e incluso en la posibilidad de asociación mutuamente provechosa con las corporaciones transnacionales; porque, en lugar de una planificación centralizada de la producción y del consumo, confían más bien en los mecanismos de mercado y en la búsqueda de ganancias privadas como estímulo y forma de organización de la economía; y finalmente, porque no prometen proscribir la estratificación de la sociedad en clases. Tampoco son regímenes de transición al socialismo, como lo demuestra el hecho de que, en todos los casos conocidos, ese paso jamás ocurrió, sino que al contrario, muchas veces se produjeron movimientos opuestos de retroceso, es decir, de restauración capitalista.

La inserción de la revolución peruana en esta modalidad de estructuración del poder conlleva el riesgo de que experimente los percances intrínsecos al modelo, principalmente el de no conducir a un desarrollo pleno y autosostenido. Esto fue lo que ocurrió, tanto en las naciones que lo perfilaron pioneramente, como la Turquía de Mustafá Kemal y el Egipto de Nasser, como en las naciones que lo encarnaron después. En las configuraciones que asumió en países latinoamericanos —México y Bolivia— sobrevinieron retrocesos que redujeron grandes expectativas revolucionarias, provenientes de movimientos sociales vigorosos, a revoluciones autocontenidas, restringidas y frustradas.

No caben dudas, empero, de que el modelo nacionalista-modernizador crea por lo menos condiciones para emprender la reforma agraria y para contener parcialmente la explotación foránea. Gracias a ello, hace posible la integración socioeconómica de grandes masas de población, pero en eso agota el potencial revolucionario de las mismas, no propiciando una liberación de energías que conduzca a grados de desarrollo comparables a los experimentados por las naciones socialistas. Es verdad que estas observaciones se refieren a cristalizaciones históricas del modelo, siendo probable que la coyuntura mundial de hoy día ofrezca a los regímenes estructurados con base en él, perspectivas de mejores desempeños.

En el caso del Perú, sin embargo, el modelo también puede resultar insuficiente porque, además de una reforma agraria —que

integre la población campesina— el régimen está desafiado a crear, a partir de una economía débil y rezagada y con base en un mercado interno reducido, un sistema productivo capaz de incorporar a la fuerza de trabajo asalariado y a la vida social, cultural y política del país, las crecientes masas urbanas marginalizadas. Este desafío de crear prontamente miles de empleos, ya en sí extremadamente difícil en el plano económico, posiblemente no encontrará solución política dentro del modelo nacionalista-modernizador. Tanto más, si la disposición de cambio del gobierno peruano se obstaculiza por el temor de las altas jerarquías militares a los experimentos osados. Este sería el caso, si no se toma en cuenta que la disyuntiva peruana estriba más bien en desarrollar una tecnología social de organización del trabajo —que ocupe toda la mano de obra disponible— antes que en la simple tecnificación modernizadora que aumente la productividad de las empresas. O aun, si no se logra convertir lo que es un simple reordenamiento de la propiedad territorial y de la gestión empresarial en un movimiento revolucionario, controlado, sostenido e impulsado por amplias organizaciones populares que incorporen las capas marginadas en las asociaciones gremiales de obreros y campesinos.

Esto significa que la cristalización del modelo nacionalista-modernizador, aunque permita al Perú romper con algunas de las constricciones del antiguo régimen y lograr avances imposibles en aquél, no le dará todavía las condiciones necesarias para impulsar un proceso de desarrollo pleno, autónomo y autosostenido, de modo que engendre una prosperidad que se extienda a toda la población. Para esto será preciso desbordar el modelo en búsqueda de nuevas vías y de metas más altas, lo cual lo convertiría, de hecho, en una variante peruana del camino socialista.

Existen algunas evidencias expresivas de que los peruanos quieren dar ese paso. La principal es el empeño del Presidente Velasco Alvarado en definir el régimen, ya no por negación, sino a través de formulaciones positivas:

“Aspiramos a un orden económico en el que gradualmente la propiedad y el control de las decisiones lleguen a estar en manos de todos los que intervienen en el proceso productivo, mediante un creciente apoyo estatal a las formas de propiedad social de los medios de producción y a la organización de instituciones que den a los sectores tradicionalmente marginados una verdadera autonomía económica cada vez mayor y capaz de garantizar su fecunda y creadora participación en las decisiones nacionales”<sup>2</sup>.

<sup>2</sup>Juan Velasco Alvarado, *La Política del Gobierno Revolucionario*, tomo III, pág. 20, Lima, 1971.

De esa decisión surge la imagen aún borrosa de un régimen tendiente a definirse mañana como socialista. Lo mismo parece desprenderse de las referencias del Presidente Velasco Alvarado al ideal de una "democracia social de participación plena" o de una "sociedad solidaria" fundadas, en el plano ideológico, en la "tradición más ilustre del pensamiento libertario socialista y humanista" y, en el plano económico, "en empresas de propiedad social, en formas autogestionadas de producción o en cooperativas" dentro de una estructura en que "el Estado debe asumir el papel directo y rector en el proceso productivo y en la orientación y el control de la economía peruana en su conjunto"<sup>3</sup>. Como al lado de estas citas se podrían exhibir referencias de tono divergente, cabe preguntarse si tal ambigüedad se explica por la reacción adversa que una opción francamente socialista suscitaría en los sectores militares más conservadores, o por las dificultades naturales de la búsqueda de un camino propio y viable para la concreción del socialismo en el Perú real y problemático que la revolución debe transfigurar.

En estas circunstancias, se acumulan las interrogantes que, al no ser contestadas, debilitan al liderazgo oficial del régimen, profundizan la inquietud de las izquierdas peruanas y aumentan su perplejidad. Con ello se dificulta a amplios sectores situarse políticamente en el marco de la nueva coyuntura, como actores positivos. En efecto, por el momento, los cuadros de la izquierda encuentran más obstáculos que facilidades para optar entre su actual postura de oposición impotente y la postura opuesta, de participación activa con miras a llevar adelante el proceso revolucionario en curso, contribuyendo a realizar sus potencialidades latentes. Es decir, orientarlo hacia una formación socialista. Estos obstáculos residen, en parte, en las propias izquierdas, cuya autosuficiencia las induce a reservarse para desempeñar el papel de protagonistas centrales de una revolución prometida. Pero residen también en el carácter del régimen militar peruano que no puede admitir adhesiones políticamente condicionadas e ideológicamente intencionalizadas. Así, el ímpase y la indefinición tienden a permanecer, frustrando a las izquierdas y empujando a algunos sectores radicalizados a acciones clandestinas que resultan contrarrevolucionarias. Y lo que es más grave, restando a la revolución peruana el concurso de cuadros políticos de gran creatividad de los que ella carece vitalmente.

Pese a esta ambigüedad —o en virtud de ella— el modelo peruano de reordenación socioeconómica viene provocando un enorme impacto en la vida política de América Latina. Las izquierdas, no obstante su evidente prevención contra el régimen, no pueden

<sup>3</sup>Ibidem.

dejar de reconocer que en el Perú fue puesto en marcha un proceso de reformas estructurales de profundidad pocas veces alcanzada. Mayor aún es su influencia sobre los militares latinoamericanos que miran al experimento peruano como sorprendente y atractivo para unos, o como algo abominable y peligroso, para otros. Primero, por el efecto de contraste que produce en relación con las dictaduras regresivas, como las de Argentina y sobre todo, Brasil, cuyo carácter antinacional y antipopular, frente al desempeño peruano, ya no puede ser atribuido a su extracción militar. En segundo lugar, porque abrió nuevas perspectivas a los militares latinoamericanos para que abandonen el papel tradicional de instrumentos represivos de las capas dominantes, a fin de asumir la calidad de agentes de la transformación intencional de sus sociedades a servicio de las mayorías. Así concebido, constituye un modelo altamente atractivo para los militares progresistas porque está en sus horizontes de decisión; porque asegura al poder militar una legitimidad quizás más auténtica que la electoral en la coyuntura latinoamericana y se basa en el apoyo masivo a un programa concreto de acción en defensa de los intereses nacionales y populares; y finalmente, porque cumple la función —para ellos de mayor trascendencia— de evitar o postergar una revolución socialista y de contrarrestar preventivamente las convulsiones sociales que ella suele desencadenar.

: Mirando hacia adelante, en un esfuerzo por prever los desdoblamientos probables del experimento peruano, lo que resalta son las opciones que se enfrentan con él y que marcarán el perfil futuro del modelo. *Primero*, la elección entre subsidiar —a la mexicana— al empresario privado en la esperanza de crear artificialmente la “burguesía nacional” que la historia no generó en los países dependientes; o la disposición opuesta de crear una vigorosa economía basada en empresas públicas autogestionarias, como fundamento de una democracia socialista. *Segundo*, la alternativa de adoptar una política económica dependiente de asociación con las grandes corporaciones multinacionales, confiando en que el aporte de capital y técnica foráneos venga a operar como un activador y acelerador del progreso; o al contrario, romper con toda la dependencia, a través de alguna forma autónoma de intercambio internacional que no sea expoliativo. La política adoptada por el gobierno respecto de la minería y el petróleo levanta dudas y muchos creen que se trata de una claudicación frente al imperialismo. Empero, hasta ahora nadie formuló una alternativa —a un tiempo viable y satisfactoria— para el problema crucial de explotar los principales recursos disponibles a fin de producir las divisas indispensables para la inversión. Los que creían en la posibilidad de una fecunda in-

teración con las economías socialistas, se vieron desilusionados por la dificultad o poca disposición de éstas para realizar inversiones o incrementar el intercambio económico fuera de su área de hegemonía.

Otro orden de opciones con que se enfrentan los peruanos dice respecto a metas sociales. Es decir, si se proponen conducir al Perú a una modernización concebida según el padrón occidental de producción y consumo; o si, al contrario, se disponen a redefinir radicalmente estas metas, introduciendo nuevos ideales de vida más satisfactorios en el plano humano. En el primer caso, el camino sería formular una ecuación económica, la cual, equilibrando el máximo de esfuerzos que se podría exigir de cada uno con el mínimo de gratificaciones que se le aseguraría, indicase en cuánto tiempo y bajo qué requisitos de coerción se podría —si ello fuera posible— alcanzar el estilo de vida de las naciones desarrolladas. En el segundo caso, las exigencias son mucho mayores, tanto en cuanto a creatividad para la formulación del proyecto de sociedad en que los peruanos desean vivir, como para viabilizar su edificación a través de un esfuerzo colectivo emprendido con fe y entusiasmo.

El debate sobre el modelo peruano levanta, además de éstas, otras cuestiones. Entre ellas, la concerniente a la estratificación social y a la institucionalidad política que resultará de los cambios en curso. ¿Cuál será el carácter del estrato superior de la nueva sociedad? ¿Su sector predominante será un *patronato* privatista de empresarios, o un *patriciado* burocrático cuyo poder advenga del desempeño de cargos? ¿Qué controles populares se podrán institucionalizar y hacer efectivos? ¿Será practicable crear en Perú una sociedad efectivamente solidaria fundada en nuevas formas de sociabilidad? Es de suponer que el temor de los militares al tumulto social y a la competencia con liderazgos partidistas —sean reformistas o izquierdistas— paralice las tendencias democratizadoras. Y sobre todo el coraje de repensar el mundo y la existencia humana con originalidad, a partir del contexto peruano. Para que ello no ocurra será necesario, a nuestro modo de ver, formular un proyecto nacional atractivo y convincente que opere como un programa revolucionario que represente para la mayoría de la población un ideario con el que cualquiera pueda identificarse, como ocurre con las identificaciones ideológicas o partidistas.

Más álgidas que estas opciones e interrogantes que aguardan respuesta del gobierno peruano, son las que se levantan delante de las izquierdas como un severo desafío teórico y político para la redefinición de su papel y de su función en la forma de una estrategia viable y genuina de lucha por el socialismo. Esta inquietud

ha sido expresada muchas veces por peruanos y extranjeros, pero nadie hasta ahora indicó una salida para la perplejidad de la izquierda en la forma de un plan concreto de acción confluyente con el impulso revolucionario en curso y capacitado a orientarlo hacia el socialismo.

Como se ve, Perú vive un momento decisivo de su historia y de la historia latinoamericana, buscando crear un modelo de reordenación socioeconómica que será decisivamente importante si realiza sus mejores potencialidades. Lo señalable, con todo, es que no se puede dejar de admitir la posibilidad de que Perú experimente un retroceso, como ocurrió tantas veces, en casos semejantes. Pero hay que admitir también que, si ello llega a ocurrir, no correspondería a un desdoblamiento necesario de las tendencias del modelo, sino a una vicisitud histórica. Y en este caso, no serían las izquierdas peruanas las herederas del despojo, sino, seguramente, alguna forma de régimen regresivo que traumatizaría por largo tiempo al pueblo peruano.

#### LA VÍA CHILENA

La victoria de Salvador Allende en las elecciones presidenciales colocó a Chile en una nueva vía de transición al socialismo. Nueva no sólo para los chilenos, sino para todos. De cierta forma, como ha dicho el Presidente Allende, Chile revive en 1971, el pionerismo de la Rusia del año 1917 que implantó el primer régimen socialista-revolucionario, al inaugurar la segunda ruta hacia el socialismo: la evolución pacífica. Es decir, la vía prevista por los clásicos, para el caso de "los países donde la representación popular concentra en ella todo el poder, donde, de acuerdo con la Constitución, se puede hacer lo que se desee, desde el momento en que se tiene tras de sí a la mayoría de la Nación". (F. Engels: *La Crítica del Programa de Erfurt*).

El paralelismo va más lejos, todavía, porque, tal como en Rusia, tampoco en Chile el socialismo surge de la madurez del capitalismo y su superación, sino en virtud de su malogro para promover un progreso generalizable a toda la población e implantar un régimen de participación popular en el poder.

Una vez más la historia actúa al revés de las expectativas. Así como la revolución de la dictadura del proletariado prevista para la Alemania industrializada se desencadena en la Rusia atrasada, también el socialismo evolutivo —que se podría esperar surgiera en países industrializados como Italia o Francia como coronamiento

de su desarrollo económico y social previo y de la madurez política del proletariado— ocurre en Chile.

Las consecuencias son también similares: la contingencia de hacer del socialismo un instrumento de edificación económica y de industrialización intensiva allí donde el capitalismo fracasó en lograrlo; y además, el desafío de rehacer las instituciones políticas, merced de la inventiva y creatividad propia por la falta de una experiencia previa en la cual inspirarse o de modelos que se pudieran copiar.

Lenin y su equipo enfrentaron con éxito esos dos desafíos. ¿Lo lograrán Allende y sus compañeros? El proyecto es tan amplio y generoso que conmueve a las izquierdas de todo el mundo. Con todo, de ello no ha resultado un respaldo efectivo a ese experimento sin paralelo. Unos, encontrando la meta demasiado alta para sus actores, la desestiman. Otros, imaginando que se trata de una trampa de la historia, indagan sobre los artificios que permitirían convertir esta vía novedosa en la ruta trillada de la dictadura del proletariado.

No cabe duda que la situación política chilena es compleja y singular. Para comprenderla en sus características peculiares es preciso remontarse a las condiciones que llevaron a la Unidad Popular a la victoria. En la base de ésta se encuentra toda la historia política anterior chilena, que logró institucionalizar una democracia parlamentaria en la cual la influencia de los partidos marxistas y de las organizaciones obreras tiene, desde hace décadas, un gran peso en el electorado. Como causa más próxima, no se puede ignorar el efecto de la posición reformista de Frei —llevada mucho más adelante por Tomic— y su afán por atender a las aspiraciones populares, bajo el asedio de una izquierda combativa que le disputaba el poder.

En efecto, el reformismo demócrata-cristiano fijó su electorado de clase media y de sectores modernizados del proletariado en una posición centrista que imposibilitó un pacto con la derecha. Por otro lado, la reforma agraria, iniciada por Frei, despolarizando el conservadurismo de los campesinos, llevó a ciertos sectores rurales a votar por la izquierda con la esperanza de que ella intensificaría la distribución de la tierra. Representó también su papel, el sectarismo de la izquierda radical, cuyo rechazo a involucrarse en las elecciones presidenciales, tuvo el efecto de configurarla como una ultraizquierda, frente a la cual la Unidad Popular ganaba, para amplios sectores, la imagen de una izquierda moderada.

Las elecciones se trabaron, por ende, entre tres fuerzas de magnitud equivalente, cada una de las cuales tenía amplias posibilida-

des de victoria, lo que disuadió a la derecha de intentar un golpe preventivo. El resultado fue la victoria de la Unidad Popular por un pequeño margen de votos, que exigió su ratificación posterior por el Congreso, ratificación lograda gracias a los votos demócrata-cristianos. En este campo de fuerzas opuestas pero independientes, los intentos de la derecha de detonar un golpe militar a través de acciones terroristas, asesinatos y chantajes económicos coordinados desde Washington, tuvieron el efecto contrario, afianzando la disciplina, cohesión y respaldo de las Fuerzas Armadas al Presidente electo y compeliendo a la democracia cristiana a respetar el referendo popular.

Al asumir el gobierno, la Unidad Popular empezó a poner en marcha un proceso revolucionario con la legitimidad de quien representa en el poder una opción libremente tomada por el electorado para conducir al país hacia un régimen de transición al socialismo, a través de la utilización del aparato gubernamental y de la institucionalidad constitucional para iniciar el desmantelamiento de las bases del capitalismo.

La primera innovación política del gobierno de Allende fue reanudar las relaciones diplomáticas con Cuba y otros países socialistas, al mismo tiempo que estrechaba los vínculos con los países vecinos —Argentina, Perú, Ecuador, Colombia—, lo que condujo al fracaso los intentos brasileños de aislar a Chile de América Latina a través de la política de “fronteras ideológicas”. La segunda innovación, todavía más importante, fue obtener del Congreso una reforma constitucional, votada por unanimidad, para nacionalizar, sin indemnización, las empresas cupríferas que producían más de la mitad de la renta nacional de divisas. Simultáneamente el gobierno reorganizó los órganos de planificación que elaboraron el programa económico a corto plazo y el plan sexenal que ofrece una primera visión global en lenguaje técnico económico de lo que la Unidad Popular propone a Chile. A esta altura ya había sido puesta en marcha la nueva política económica y salarial que aseguró, de inmediato, un sustancial aumento en el poder de compra de las capas asalariadas más pobres, absorbió la cesantía que pesaba sobre la gran masa de trabajadores, puso en actividad la capacidad ociosa de las industrias ya instaladas, fijó los precios de bienes fundamentales y, merced a todas esas medidas, redujo el ritmo de la inflación por procedimientos opuestos a los de la política económica tradicional. Simultáneamente, se acelera y profundiza la reforma agraria dentro de la reglamentación heredada del gobierno anterior, pero se busca cambiar el criterio de la multiplicación de granjas por el de grandes complejos cooperativos y estatales de producción agropecuaria.

Lo decisivo, en el campo económico, fue, sin embargo, la estatzación del sistema bancario y del comercio exterior a través de medidas administrativas y la incorporación al sector social, por los mismos procedimientos, de la mayor parte de las grandes empresas nacionales privadas, especialmente la industria textil.

Este conjunto de medidas de reordenación socioeconómica, que superó las expectativas más optimistas, fue alcanzado utilizándose tan sólo los resortes del sistema vigente, gracias al control de la máquina gubernamental. En su totalidad representan, probablemente, el máximo de medidas de cambio estructural que se podía lograr en tan corto plazo, dentro de la coyuntura. Un máximo que representaría, por lo demás, un alto logro para cualquier proceso revolucionario en sus primeros pasos.

La derecha, sintiéndose amenazada de muerte por los efectos de esa nueva política económica, se moviliza y pone en acción todos los recursos de que dispone para provocar una crisis paralizadora. Algunos sectores desesperados vuelven a conspirar y a fomentar atentados a través del estímulo y subsidio de grupos parafascistas. Otros, buscan la alianza con los demócrata-cristianos para una campaña de oposición llevada a cabo mediante acciones conjugadas en varios frentes.

Tales son, en la arena propiamente política, la presentación de candidatos comunes en las elecciones complementarias, que obligan a la Unidad Popular a tratar de conseguir la mayoría absoluta de votos a fin de conquistar la victoria; el constante hostigamiento parlamentario a través de la no aprobación del presupuesto de servicios asistenciales del Gobierno; los intentos de destitución de Ministros de Estado; la aprobación de reformas constitucionales destinadas a restar autoridad al Presidente de la República y a obstaculizar la utilización de reglamentos y leyes anteriores para llevar a cabo la transferencia de las grandes empresas privadas al área social.

En el terreno más amplio de las acciones de masas, sobresalen dos órdenes de medidas. El estímulo sindical de reivindicaciones salariales —no obstante el amplio programa redistributivo del gobierno— con el objeto de contrarrestar la política antinflacionista. Y la movilización de la prensa oral y escrita y de todos los medios publicitarios disponibles para atemorizar a las capas medias. Estas, naturalmente, temerosas frente a un gobierno que busca una identificación explícita con las capas más pobres, especialmente con el proletariado, se vuelven una víctima fácil de campañas dirigidas a convencerlas de que su futuro será peor que su pasado porque serán fatalmente despojadas, no de lo que tienen —que es bien po-

co— sino de lo que aspiran tener. Surgen así, masas maniobrables por la reacción, utilizadas en marchas de protesta contra el desabastecimiento y en confrontaciones con la izquierda en las Universidades. Con ello, la derecha busca construir una base social para la contrarrevolución, explotando la inseguridad típica de estas capas y las dificultades de abastecimiento que ellas enfrentan, provocadas por las propias reformas económicas en curso, por el extraordinario aumento del consumo popular, por el *boicot* empresarial y por la hostilidad de los pequeños comerciantes a un gobierno de orientación socialista.

Las tácticas más peligrosas de la oposición son, sin embargo, por un lado, las campañas periodísticas y parlamentarias en tono sensacionalista sobre tomas ilegales de fondos, ocupaciones de empresas por los obreros, actos subversivos de la ultraizquierda, pretendidas medidas ilegales del gobierno, o la explotación más exaltada de conflictos virtuales entre los tres poderes. Y, por el otro, la tentativa de provocar enfrentamientos armados por parte de grupos parafascistas a fin de inducir las izquierdas o a las propias fuerzas de mantenimiento del orden a actos de violencia que conmuevan a la opinión pública. Todo ello, con el propósito de persuadir a las Fuerzas Armadas de que hay un atropello a la legalidad, o una amenaza inminente de subversión del orden institucional que sólo podría ser detenido mediante un golpe militar.

De hecho, el golpe es la única esperanza de sobrevivencia de la derecha que sólo en un retroceso del proceso de socialización ve perspectivas de recuperar sus privilegios económicos y la regencia de la estructura de poder. Los políticos de oposición centrista resisten a este llamado a la desesperación, argumentando que son crecientes sus oportunidades de victoria electoral en una confrontación con la Unidad Popular. Esta actitud conciliatoria se inspira también en la convicción de que un golpe militar en Chile, además de conllevar al riesgo de una guerra civil, resultaría en la proscripción de los políticos de la estructura de poder, como ha ocurrido en toda América Latina. Sólo la derecha, sintiéndose desangrada por la pérdida progresiva de las bases económicas de su poderío, prefiere cualquier tipo de régimen al vigente. Esta es también la disposición de ciertos grupos de clase media, en proceso de fascistización, que las élites derechistas procuran fanatizar a cualquier costo.

La eventualidad de un golpe militar en Chile, aunque no pueda ser descartada, es relativamente pequeña, dado el vigor de la institucionalidad política chilena y el carácter revolucionario del liderazgo de Allende. Frente a gobiernos reformistas que buscaban cambiar algo en las viejas estructuras, principalmente para conser-

var lo esencial del orden privatista, la simple amenaza de un golpe de estado ha sido fatal, como quedó demostrado en los casos de Brasil (Vargas en 1954, Goulart en 1964) y de Argentina (Perón, 1955). En esos casos, la respuesta al golpe podría haber sido el desencadenamiento de una revolución social, porque los tres gobernantes contaban, en el momento de su caída, con amplio apoyo popular. Sin embargo, prefirieron caer a encausar una revolución social que, como líderes reformistas, veían como una amenaza más grave que el propio golpe.

La situación es distinta en el caso del gobierno de Allende en virtud de su postura revolucionaria. Cuando menos, los militares golpistas temen que a Allende no lo derribarán con movimientos de tropas y amenazas, sin lucha. Temen que, al intentarlo, estarán poniendo en juego sus bienes, su honor e incluso su vida, lo que es de por sí suficientemente disuasivo para cualquier aventurero.

Pero si la amenaza de un golpe militar derechista en el Chile de hoy no es tan tajante como lo ha sido en otras partes, tampoco es seguro que el gobierno de la Unidad Popular pueda enfrentarlo con la revolución social, si llega a desencadenarse. Para eso necesitaría, además de su predisposición revolucionaria, alcanzar un poder de movilización popular y de unificación política que probablemente exceda la capacidad presente de los partidos de la Unidad Popular.

Sin embargo, sólo adquiriendo esa capacidad, el gobierno de Allende podrá hacer frente a amenazas más inminentes que las de un golpe militar, que son las representadas por los obstáculos que se oponen a la tarea política de concretar la vía chilena. El principal de esos obstáculos reside, probablemente, en la ineptitud de la Unidad Popular para explicar a sus propios cuadros en qué consiste esa vía, cuáles son los requisitos indispensables a su éxito y cuál es el alcance de las reformas institucionales que ella demanda. El problema es tanto más grave porque la izquierda llamada a poner en marcha esta vía fue formada ideológicamente según las doctrinas del socialismo-revolucionario y de la dictadura del proletariado, cuya estrategia y tácticas son en ciertos casos opuestas a lo que debiera corresponder al camino evolutivo.

En estas circunstancias, atender a las exigencias mínimas de explotación de las potencialidades de la vía chilena es, a veces, extremadamente difícil, en razón del reto al gobierno por parte de gran número de los cuadros políticos más capaces de la izquierda. Estando convencidos de que la vía chilena es, en esencia, una maniobra electoral, no admiten que su tarea sea la movilización y organización política de las masas, o la batalla ideológica para neu-

tralizar la fascistización de las capas medias. Acreditan, más bien, que su deber es prepararse para la lucha armada para la toma del poder, lucha que, a su juicio, tendrán que enfrentar, sea contestando ataques de la derecha, sea utilizando, por iniciativa propia, oportunidades que se ofrezcan para llevar adelante el proceso revolucionario, tal como lo conciben.

Este múltiple reto ideológico: elaborar la teoría de sí mismo y contestar, a nombre de un socialismo evolutivo, al universalismo de las doctrinas revolucionarias ortodoxas y al catastrofismo de la izquierda radical, debe ser enfrentado justamente cuando más se necesita de unidad de acción y de comando para encarar la nueva coyuntura política. En efecto, el centro y la derecha en proceso de fusión, pueden infligir una calamitosa derrota a la Unidad Popular, sea imponiéndole un plebiscito en condiciones desfavorables, sea aventajando a la UP en las próximas elecciones parlamentarias (abril de 1973) que tendrán, por sí mismas, el sentido de un referéndum. Semejante derrota podrá producirse si el gobierno no logra estructurar una base masiva de apoyo, no en lo que él promete para el futuro, sino por lo que representa como progreso y bienestar aquí y ahora, para la mayoría de la población. Esto significa que el gobierno de Allende, además de ideológicamente cuestionado por la izquierda y hostigado por la derecha como ninguno lo fue, debe alcanzar un nivel de eficacia económica, administrativa y redistributiva sin precedentes. Es que no se trata aquí de una situación revolucionaria, llena de tesón y fervor, sino de un cuadro relativamente frío en el que, para llegar al socialismo, el gobierno de la Unidad Popular tiene que conquistar un electorado consumista, más bien por promesas de tipo material que a través de proposiciones ideológicas.

En estas circunstancias, las futuras elecciones, que de cierta forma decidirán el futuro de la vía chilena, representan un severo desafío. Como en tales ocasiones las fuerzas políticas se dividirán eventualmente en dos bloques, la Unidad Popular deberá obtener el 51 % de los votos para que pueda ascender de la condición de un grupo socialista en el gobierno a la de un poder socialista. Es evidente para todos que esta victoria electoral no representaría, de por sí, garantía suficiente de concretización de la vía chilena. Pero es por igual evidente que una derrota electoral la liquidaría. La verdad es que, un poder institucional respaldado por la legitimación otorgada por un apoyo popular mayoritario —expresado libremente en elecciones universales y fundado en una nueva Constitución de corte socialista— ofrecería las condiciones esenciales para acelerar el proceso revolucionario chileno en el sentido de transfi-

gurar el régimen de privatista en socialista, dentro del modelo evolutivo. Obviamente, esto sólo representaría un comienzo, porque la edificación de una sociedad nueva, el temple de una mentalidad abierta hacia lo social, lo nacional, lo humano, es un proceso necesariamente lento y sujeto siempre a vicisitudes, cualquiera sea la ruta.

La experiencia chilena, aunque en pañales, ha demostrado que a un régimen "liberal-burgués" típico —como el encarnado por el gobierno de la DC— pudo seguirse una situación de transición en la que un equipo gubernamental de inspiración socialista llevó a cabo actos legales de carácter netamente "antiburgués", amenazando quebrantar el poder de las clases dominantes tradicionales. Es decir, la vieja institucionalidad —erigida formalmente por la voluntad popular, pero utilizada desde siempre para legitimar un orden social puesto a servicio de las minorías privilegiadas— pudo ser manejada con objetivos opuestos. Frente a este vuelco, la vieja clase se amotina, reclamando contra un "despotismo legal" que ella siempre ejerció, porque ahora se vuelve en contra de sus intereses.

Tiene límites, evidentemente, esta posibilidad de utilizar las facultades proporcionadas por el sistema vigente, en contra de él. Una vez agotadas, el gobierno de la Unidad Popular tendrá que conquistar los medios para tornar factible una nueva institucionalidad que le permita ir más allá de su programa de transición, para marchar resueltamente hacia la socialización. Pero deberá hacerlo, no por la erradicación del aparato burocrático del Estado, ni tampoco por la liquidación del Parlamento, del Poder Judicial o de las Fuerzas Armadas, sino encontrando las formas adecuadas para imponer un desplazamiento de sus lealtades, hasta ahora devotas a las minorías privilegiadas, pero que tendrán que respaldar, mañana, a los intereses mayoritarios. Es decir, deberá hacerlo, no por la ruptura de la institucionalidad vigente (ese sería el caso si la vía fuera la armada y tuviera la necesaria fuerza para operar la ruptura), sino mediante su transfiguración dentro de las reglas establecidas, que son el voto mayoritario del electorado a la Unidad Popular y la organización de las bases de ésta para defender su victoria, en una forma que la historia debería plantear. En ese sentido, el desafío puesto delante de las izquierdas es alcanzar esa victoria a través de la persuasión y de una política compleja de juegos y alianzas.

Una victoria completa supondría el salto de un tercio a la mitad del electorado, lo que es factible —como quedó demostrado por el aumento de votos de la Unidad Popular en las elecciones de regidores— pero puede resultar difícil en la presente coyuntura. Esta

se caracteriza, por un lado, por la inseguridad de vastos sectores de la clase media, provocada tanto por las campañas de atemorización de la derecha, como por debilidades de la propia Unidad Popular, que no tiene por qué inspirar temor si se mantiene dentro de las perspectivas de la vía evolutiva.

Y por otro lado, por el hecho de que en las próximas elecciones votarán, por primera vez, los analfabetos y los jóvenes de 18 a 20 años. Sus intereses corresponden más bien a la orientación socio-económica de la Unidad Popular, pero sus preferencias políticas son difíciles de prever y pueden conllevar sorpresas. Estas sorpresas pueden surgir principalmente, si no se mejora sustancialmente la influencia política de la Unidad Popular sobre la opinión pública, en particular sobre las capas medias; si no se quebranta el sectarismo de las izquierdas radicales y el partidismo de las izquierdas institucionales; y si no se formula y se difunde entre las masas una imagen convincente y motivadora de lo que la vía chilena y la revolución socialista les ofrecen concretamente.

La hipótesis de una victoria completa y decisiva perseguida tenazmente por Allende y posible a condición de que toda la izquierda se unifique alrededor de un programa común de acción, abre al gobierno otra alternativa. Es la alianza política con sectores progresistas de la democracia cristiana para llevar un programa socialdemocrático que postergaría para el futuro una opción propiamente socialista. La alternativa sombría a estas dos hipótesis sería la derrota de la Unidad Popular en las elecciones frente a una coalición de toda la oposición. Esta derrota representaría para Allende la amargura de tener que completar su mandato con las manos atadas por un Parlamento todavía más hostil que el actual, viendo el reemplazo, en la izquierda chilena, de la perspectiva evolutiva por la vía armada, en condiciones extramadamente difíciles de lograr éxito.

Sumariando nuestro análisis se puede decir que la batalla que la Unidad Popular tiene por delante, en su segundo año de gobierno, es proseguir en el camino que se impuso para poner en práctica, dentro de la institucionalidad, la mayor parte de su programa de transición al socialismo, antes que se agoten totalmente las posibilidades de acción ofrecidas por la legislación preexistente y por las regalías aseguradas al ejecutivo, con el objeto de ampliar sus bases populares de apoyo. Con pie en esto, crear condiciones políticas para cambiar mañana la propia institucionalidad, capacitándose para enfrentar con éxito total la contienda electoral; o, caso contrario, encontrar una salida pactada que no represente retroceso.

Ese ya es un reto suficientemente grande como para exigir que

la Unidad Popular concentre en él todas sus energías y suficientemente radical para ser percibido como inaceptable por la derecha y para llevarla a la conspiración. Pero además de esta batalla, la Unidad Popular está desafiada a enfrentar otra: la de obviar la oposición de la ultraizquierda y de los sectores que ella influye, los que ayer no creyeron en la victoria electoral como hoy día no creen en las potencialidades de la "Vía chilena". Por ende, afirman que el socialismo sólo se concretará si el gobierno utiliza sus recursos, no para ganar elecciones —cuyo éxito ponen en duda— sino para crear condiciones para conquistar el poder mediante un futuro enfrentamiento armado. Dentro de ese razonamiento, buscan intensificar el proceso de cambios, forzando situaciones tensas, como la rebeldía secular de los mapuches. Desbordan así los límites impuestos por la vía evolutiva, teniendo en mira la conversión de ésta en una vía revolucionaria, supuestamente posible y más expedita para alcanzar los objetivos de la construcción del socialismo.

Esta disyuntiva pone al desnudo la perplejidad de amplios sectores de la izquierda frente a la especificidad y singularidad del proceso político chileno. De hecho la vía evolutiva, parlamentaria, persuasiva, que tiene como regla insoslayable el no poder hacer nada sin el apoyo de las mayorías, pero también la posibilidad de hacerlo todo si se cuenta con este apoyo, no es el camino que la ultraizquierda está preparada para aceptar como deseable o aun mismo imaginable. Formados en la lucha clandestina, conformados por años de militancia sectaria e impotente, sus mejores cuadros no ven en la Unidad Popular, ni la capacidad ni la voluntad de conducir el proceso revolucionario chileno a sus últimos objetivos. Tampoco reavalúan su propia experiencia, sino que insisten en reiterarla a cualquier costo, lo que puede convertirlos en un factor decisivo de obstaculización de la vía evolutiva.

Pocas veces en la historia, un movimiento revolucionario tuvo delante suyo la oportunidad que se ofrece a la izquierda chilena para poner en práctica su programa político e ideológico y enfrentar la vieja estructura de poder en condiciones privilegiadas. Desafortunadamente, enceguecida por el sectarismo y la estrechez doctrinaria, su facción más radical desecha esta oportunidad de repensar su táctica y estrategia a partir de un contexto sociopolítico lleno de potencialidades de creación teórica original. Ellos replantean como un nuevo camino de la revolución, todas las cuestiones fundamentales de la edificación del socialismo en un país real y en el tiempo presente.

En consecuencia, paradójicamente, vemos corresponder a la desesperación perfectamente comprensible de la derecha chilena, una

postura también desesperada de su ultraizquierda, cuyo efecto es provocar actitudes de desaliento y de entrega en amplios sectores de la intelectualidad izquierdista y en la militancia que la acompaña.

¿Cómo explicar esta disidencia frente a los logros del gobierno Allende en su primer año que desafían comparación con los de cualquier revolución social en igual período? No será seguramente en la ineficacia práctica del régimen que se asientan las razones del radicalismo. Tampoco es admisible que sus reservas se deban a incompatibilidades ideológicas irreductibles con respecto a los diversos componentes de la Unidad Popular. De todo ello se llega a la conclusión de que las causas de la disidencia quizás se ubiquen en la propia perplejidad de la izquierda radical frente a lo inusitado, complejo y desafiante del proceso chileno que al no ser evaluado en su magnitud real provoca, paradójicamente, reacciones nostálgicas respecto a los modelos históricos de socialismo-revolucionario aunque se sepa que ellos no pueden ser reproducidos tal como ocurrieron, y menos aún en Chile.

Lo cierto es que los nuevos caminos que la historia hizo surgir en Chile no corresponden a las expectativas heroico-catastrofistas desarrolladas por una izquierda radical que ayer se reveló predispuesta a inmolarse en acciones heroicas, pero que hoy se paraliza, incapaz de incorporarse a la lucha que se traba aquí y ahora. Es incapaz por igual de proponer, en la teoría y en la práctica, una ruta alternativa que sea a un tiempo viable y eficaz para llegar al socialismo.

Esta doble incapacidad para redefinirlas y movilizarse para las tareas que la historia plantea a Chile, haría sospechar que se estuviera frente a una secta políticamente inmadura e incapaz de concretar su proyecto utópico de revolución. Como tal, no tendría mayor importancia. No es así, sin embargo, debido a la influencia desalentadora que ella ejerce sobre los cuadros de la Unidad Popular, principalmente sobre el Partido Socialista, y por las oportunidades que ofrece a la reacción para crear un clima de intranquilidad propicio al aventurismo golpista. No lo es, sobre todo, porque esta influencia erosiva de la extrema izquierda tiene sus raíces en una debilidad teórica innegable de la dirigencia de la Unidad Popular. Es decir, su incapacidad de formular teóricamente, con agudeza y claridad, su propio proyecto de transición evolutiva al socialismo, de modo a contrarrestar, tanto al dogmatismo de la izquierda tradicional como al catastrofismo de la ultraizquierda para unificarlas en una estrategia común de lucha por el socialismo.

Excepto algunos discursos del propio Presidente Allende, lo único que ha surgido en este campo, son planes tecnocráticos de corto

alcance que están lejos de representar un análisis profundo de lo que la experiencia chilena puede aportar para la formulación teórica de la segunda vía hacia el socialismo. Y menos aún de forjar el planteo político-ideológico indispensable para llevar adelante la revolución chilena. Incitar a esta creatividad teórica será, quizás, el único mérito de la oposición izquierdista radical.

\*

Como se ve, América Latina tiene delante tres modelos de revolución social. El cubano, de carácter socialista-revolucionario; el chileno, de tipo socialista-evolutivo; y el peruano, que representa una variante nueva del modelo socialista-modernizador.

Cuba, pionera en la búsqueda de los caminos de liberación de los pueblos latinoamericanos, desarrolló las potencialidades del socialismo-revolucionario a partir de las difíciles condiciones que le han impuesto: el cerco económico, la amenaza permanente de un ataque externo y el hostigamiento constante del imperialismo y sus serviciales. Pese a esto, logró importantes victorias en el sentido de crear una sociedad igualitaria, capaz de progreso generalizable a toda la población, libre de tensiones sociales y raciales y dinamizada por un proceso intensivo de autoafirmación y autoconstrucción. Por todo esto, promete constituirse en esta década en una vidriera abierta al continente sobre lo que el socialismo puede aportar a los pueblos latinoamericanos.

Chile inaugura solo y lleno de ambigüedades una nueva ruta histórica de transición al socialismo. Una ruta quizás más significativa, en el plano programático, para otras latitudes que para Latinoamérica, dada la dificultad de adaptar el modelo chileno a situaciones legales distintas. Es decir, sin la adopción, verdaderamente imposible, de su biografía política de décadas de democracia representativa, enteramente atípica en el continente. Aun así, el modelo tiene enorme importancia política por el efecto dessectarizante que ejerce sobre las izquierdas latinoamericanas, comprobando que, al menos en condiciones como las chilenas, tiene cabida un socialismo evolutivo.

Perú configura probablemente el modelo más fácilmente adoptable en la América Latina de nuestros días. Por esto mismo, está destinado a representar un importante papel en la activación de la vida política del continente, por la incitación que representa para los militares de romper su pacto con la reacción, a fin de ejercer un nuevo papel de agentes de la emancipación de sus sociedades.

Los tres modelos son la esperanza de este continente sufrido de pueblos que ayer fracasaron en sus intentos de insertarse autónomamente en la civilización industrial y que hoy día se ven amenazados de reiterar su papel subalterno respecto a los países avanzados, dentro de la civilización emergente. Eso fatalmente sucederá si no logran, por una de estas tres vías de renovación estructural, proscribir de las estructuras de poder a las clases dirigentes tradicionales, cuyo proyecto privatista de prosperidad consiste, precisamente, en imponer a sus pueblos una modernización refleja que los congele en la función de proletariados externos de las potencias del futuro.